

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Juan N. Rubio, contra la providencia dictada por el C. Julian Camacho, que funge de Ministro supernumerario del Tribunal de Justicia de ese Estado, en el juicio seguido por el C. Francisco Pastor contra el quejoso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que demandado ejecutivamente el C. Juan N. Rubio por el C. Francisco Pastor, ante el Juez 2º de letras de esta ciudad, fué remitido el expediente á una de las Salas del Tribunal Superior para la calificación del grado en un auto apelado; la cual conforme á la ley de procedimientos del Estado, se hace por el Juez *ad-quem*. El C. Juan N. Rubio solicita el amparo correspondiente á la falta absoluta de jurisdicción de la persona que desempeña el cargo de Magistrado en la Sala que conoció de su asunto, que no es autoridad competente para molestarlo en su persona y bienes; habiendo violado con ese procedimiento el artículo 16 de la Constitución federal.

Cuando el artículo 101 de la Constitución confía á los Jueces federales la guarda de los derechos del hombre, caso de ser atacados por una autoridad cualquiera, á la vez que el 102 determina que no se hagan declaraciones generales en las sentencias que con ese objeto se pronuncien, es preciso convenir en que los legisladores de 57 comprendieron perfectamente la naturaleza de la jurisdicción con que invistieron á los Jueces federales, que han usado siempre de ella con tacto y discreción. En su ejercicio, importa sondear antes el terreno que se va á recorrer, y no asentar, sobre todo, máxima al-

guna que no lleve consigo el sello indisputable de la verdad, ni buscar un resultado que no acredite la experiencia como benéfico; porque es en materia de derecho constitucional, donde á medida que se avanza, surgen desconocidas dificultades, se descubren nuevos obstáculos, y las engañosas vías se multiplican, de manera, que si el juriscónsulto abandona un instante el hilo de inducción, se encuentra errante y como arrojado al acaso en medio de la tempestuosa región de las pasiones políticas, exponiéndose ó á no alcanzar ó á sobrepasar el fin propuesto.

Cuando los autores de la Constitución determinaron así los lindes del poder judicial, tuvieron idea cabal de su ilimitada influencia. En efecto, esta se extiende á todas las acciones del hombre; pues por poco que se reflexione, se nota que ninguna puede dejarse de considerar legítima ó ilegal, según esté permitida ó prohibida por la ley. Y si esto es aplicable al poder judicial en toda su extensión, también lo es al de la federación, que instituido para aplicar la ley fundamental, no hay acto de autoridad que no caiga bajo su dominio, según esté permitido ó prohibido por ella. "Cuando se invoca ante los tribunales de los Estados Unidos, dice un publicista, una ley que el juez reputa contraria á la Constitución, puede negarse á aplicarla, cuyo poder es peculiar al magistrado americano, derivándose de allí un cuantioso influjo político. Con efecto, hay poquísimas leyes propias para desentenderse por mucho tiempo del análisis judicial, porque hay muy pocas que no ofendan un interés personal, y que no puedan ó no deban invocar los litigantes ante los tribunales." "Los americanos han juzgado, que hay casi imposibilidad de que una ley nueva no agrave en su ejecución algún interés personal." (Tocqueville de la Democracia en América).

Es el objeto de los juicios de amparo, guardar ilesas las garantías individuales, preservándolas de todo ataque que sufran por parte de una autoridad constituida. Ci-

fiéndose á este fin especial, en vez de causar perturbacion en los derechos del hombre, tienden á conservarlos, y para conseguirlo, el artículo 102 de la Constitucion manda, que la sentencia sea siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y á ampararlos en el caso sobre que versa el proceso, sin hacer ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que la motivare. Y por esta declaracion general, que tan cuidadosamente prohíbe la ley, es tambien de entenderse la que afectando una forma singular, produce realmente los efectos de aquella, como la de que los miembros de un tribunal no puedan conocer de un litigio, por no haber sido ritual y rectamente elegidos. En efecto, esta proposicion es trascendental á toda la sociedad, y la sentencia que la contuviera, dejaria de ocuparse de un caso esencialmente personal. Puesta, no ya en evidencia, sino en duda la nulidad de los poderes de un Estado, cesan los contribuyentes de satisfacer sus asignaciones, los litigantes de promover sus pleitos, las oficinas recaudadoras de la federacion de recibir el veinticinco por ciento adicional, así como de expender papel sellado, y los tribunales de estar siempre expeditos para administrar justicia; viniéndose así á suspender una garantía primordial por el mismo medio instituido para protegerla.

Preciso es por lo mismo convenir, en que semejantes trastornos sociales quisieron evitar los legisladores de 57, cuando redactaron el artículo 102 de la Constitucion, y preciso es tambien buscar otro remedio mas violento á las usurpaciones de poder, que el dilatadísimo de los amparos; que tienen que ser mil veces repetidos, antes de que los usurpadores vengán á quedar en la crítica situacion de los patricios de Roma cuando el pueblo se retiró al Monte Aventino.

Si como ha probado el quejoso, los Ministros del Tribunal de Querétaro tienen usurpados sus puestos, arrogándose en consecuencia el poder y jurisdiccion que ejercen,

TOMO IV. — PÁGINA 11.

están sin duda en el caso de la fraccion 10 del artículo 39 de la ley de 6 de Diciembre de 1856, y sujetos á los procedimientos del artículo 49 y siguientes de la misma.

En vista de lo cual, el Promotor pide: 1º, se niegue el amparo solicitado: 2º, se proceda, sacándose copia de este expediente, contra los que se han arrogado el poder judicial de Querétaro, en la forma referida de la ley de 6 de Diciembre de 1856. Querétaro, Diciembre 4 de 1872.—*Juís Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Enero 3 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Juan N. Rubio contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Julian Camacho que funge de Ministro supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en un Juicio ejecutivo que contra Rubio sigue el C. Francisco J. Pastor; los informes rendidos por la autoridad ejecutoria; los alegatos fiscales; las pruebas rendidas; lo que el actor y promotor expusieron en vista de las pruebas; la citacion para sentencia; y todo lo demas que verse y tenerse presente convino.

Considerando: que la parte del C. Juan N. Rubio ha interpuesto amparo de la providencia dictada por el C. Julian Camacho que fungió de ministro supernumerario del Tribunal de Justicia del Estado, y por cuya providencia el Juez 2º de Letras procedió al embargo de bienes del quejoso, que por tal acto el C. Rubio cree que se ha violado en su persona la garantía que le concede el art. 16 de la constitucion general de la República, por no ser autoridad competente el Ministro Camacho.

Considerando: que conforme al art. 96 de la constitucion del Estado, los ministros del Tribunal de Justicia deben ser postulados por los Colegios electorales de Distrito, que es lo que se refiere en las segundas pregun-

tas del interrogatorio de fojas, sobre que las elecciones de Magistrados del Tribunal Superior no se hicieron con arreglo á las prescripciones legales, y de cuyo hecho depusieron dos testigos mayores de toda escepcion, pues el testigo José Dominguez, otro de los aducidos, no hace fé por ser pariente del que lo presentó.

Considerando: que la incompetencia á que alude el C. Juan N. Rubio, no es otra sino la falta absoluta de jurisdiccion del que funge de Ministro del Tribunal de Justicia, por no haber recibido el nombramiento de la eleccion del pueblo; siendo por lo mismo una autoridad puramente de hecho que no tiene poder alguno natural ni conferido; pero que reputándose como legítima, cuenta con todos los medios para llevar á efecto sus determinaciones, por lo que deben admitirse contra ella todos los recursos que se confieren contra las autoridades realmente legítimas; que por esta falta de eleccion se ha infringido tambien el art. 109 de la carta federal, que previene á los Estados en su régimen interior la forma de Gobierno representativo, popular, federal, y que una vez impuesta á los Estados esta forma de Gobierno y consistiendo esta en que las autoridades de cada Estado sean nombradas como se previene en su respectiva constitucion, que nunca puede ser contraria á la federal, segun el art. 41 de la propia constitucion, es por lo mismo inconcuso que el C. Camacho por no haber sido electo popularmente, se debe reputar incompetente, como queda comprobado ademas con el decreto núm. 18 fojas.

Considerando: Que á mayor abundamiento existen pruebas de la ilegitimidad de la Legistatura para poder hacer el nombramiento de Ministro supernumerario en el C. Julian Camacho, por no haberse instalado la Legislatura con las formalidades debidas y quorum correspondiente, y habiendo sido ademas publicado el expresado decreto por el C. Julio M. Cervantes que no es Gobernador segun las pruebas rendidas por el

quejoso, pues el art. 77 de la constitucion del Estado se lo prohíbe.

Considerando: que la parte quejosa ha probado suficientemente, ya con los testigos contestes, ya con los recados presentados en término probatorio, la incompetencia del expresado Ministro Julian Camacho, así como la ilegalidad de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el primero no puede expedir el decreto sobre el nombramiento del referido Ministro y el segundo publicarlo.

Considerando: que ni el Promotor fiscal ni la autoridad responsable han probado que hubiera habido elecciones del referido Magistrado supernumerario, ni tampoco la legitimidad de los poderes Legislativo y Ejecutivo; y antes bien el C. Fiscal confiesa, que los Ministros han usurpado sus puestos.

Considerando: que el art. 16 de la Constitucion general, no hace distincion ni escepcion entre las autoridades legítimas y las de hecho, por lo que tanto con unas como con otras debe caber el recurso de amparo siempre que haya infraccion de garantías, sin que tenga lugar distincion ó escepcion alguna, respecto de dicho artículo, so pretexto de la soberanía de los Estados de que malamente usan los usurpadores del poder, erróneamente ó de mala fé. Por las razones y fundamentos expuestos, y con apoyo de los artículos 16, 101, 102 y 103 de la Constitucion de la República, y correlativos de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo:—1º, que la Justicia federal ampara y protege al C. Juan N. Rubio contra la providencia dictada por el C. Lic. Julian Camacho, que funge de Ministro Supernumerario del Superior Tribunal de Justicia de este Estado, en el juicio seguido por el C. Francisco Pastor contra el quejoso.—2º Répóngase por la parte de Rubio el papel de que se ha hecho uso con el del sello correspondiente.—3º Sáquese testimonio en lo conducente de este expediente, y remítasele al C. Juez propietario de Distrito, con aten-

ta comunicacion, para que proceda, si lo creyere arreglado á la ley, conforme al pedimento fiscal que pide se proceda contra los Ministros, con arreglo á la ley de 6 de Octubre de 1856.—4º Hágase saber; sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el "Diario Oficial," y "Semanario Judicial" y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Así lo mandó y firmó el C. Juez primer Suplente de Distrito Lic. Mariano Pimentel. Doy fé.—*Mariano Pimentel.*

Es copia. Querétaro Enero 23 de 1873.
—*Francisco Ruiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 18 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido ante el primer suplente del juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Juan N. Rubio, contra los autos y providencias dictadas por el C. Lic. Julian Camacho que funge de Ministro supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado, en un juicio ejecutivo que contra Rubio sigue el C. Francisco J. Pastor; la sentencia del inferior y demás constancias que obran en autos, y considerando, en cuanto á la incompetencia objetada por Rubio á dicho Magistrado: que tal incompetencia llamada de origen por el vicio que se atribuye al C. Camacho, debe considerarse comprendida como cualquiera otra en el artículo 16 de la Constitucion federal, puesto que ella no hace distincion ni escepcion alguna. Que admitir una distincion y escepcion por salvar la independencia y soberanía de los Estados en su régimen interior, menospreciando al individuo quejoso, sería sacrificar los derechos del hombre que son el fin, á la institucion que es el medio, (artículo 1º de la Constitucion.) Que para mayor garantía de los derechos del hombre, la independencia misma y la soberanía de los Estados se encuentra restringi-

da por el artículo 109 de la Constitucion federal que les impone el deber de adoptar la forma de gobierno representativo popular, de manera que se vería infringido además este precepto constitucional si la incompetencia que se objeta á la autoridad fuera por su origen contraria á esa forma de gobierno.

Que por tales razones, y para no dejar violada una garantía individual, ni quebrantado un precepto constitucional, se hace indispensable entrar en el exámen de si los Magistrados han sido bien nombrados bajo el punto de vista de la Constitucion federal.

Que una vez impuesta á los Estados la forma de gobierno representativo popular, y consistiendo esta forma esencialmente en que por lo ménos, los poderes sean electos como se consigna por la misma Constitucion del Estado, es consecuente, que los Magistrados que forman el Tribunal Superior de Querétaro, no pueden ser nombrados sino por eleccion popular ó de lo contrario serán incompetentes.

Considerando, en cuanto á si hubo ó no elecciones en Querétaro para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior: que no ha habido en Querétaro tales elecciones populares, 1º, por la declaracion de testigos y 2º por la presentacion de toda la serie de decretos expedidos por la Legislatura hasta la declaracion de Magistrados, entre los que no se encuentra el decreto de convocatoria que fijara los dias en que debieran hacerse las elecciones populares en los seis Distritos del Estado.— Por las razones y fundamentos expuestos se declara:—Primero: Que se confirma la sentencia del Juez 1º suplente del Juzgado de Distrito de Querétaro, pronunciada en 3 de Enero del presente año que amparó al C. Juan N. Rubio contra la providencia dictada por el C. Lic. Julian Camacho, que funge de Ministro supernumerario del Superior Tribunal de Justicia de Querétaro, en el juicio seguido por el C. Francisco Pastor contra el quejoso.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de donde proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordoñez.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 13 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

JUICIO

De responsabilidad contrahida por el C. Lic. D. Jesus Sanchez Mireles, como suplente por la ley del juez de Distrito del Estado de México, en la causa instruida contra Francisco Torres y socios por infidencia.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO.

El fiscal dice: que al dictar el tribunal el auto de sobreseimiento en la presente causa, mandó que esta pasase al ministerio público por la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el C. Lic. Jesus Sanchez Mireles al condenar á la última pena al reo Francisco Torres, sin habérsele oído. Igual providencia recayó en la causa instruida contra Martin Aleman, en la que el propio juez procedió del mismo modo, pidiendo el que suscribe que aquel informase, y como uno mismo es el individuo cuya conducta va á examinarse, así como es igual el motivo de la averiguacion, se hace preciso que para este efecto sean acumuladas las dos

causas, mayormente cuando el informe dado en la segunda se refiere al de la primera. El C. Lic. Sanchez Mireles no niega el hecho de haber pronunciado sentencia contra dos reos prófugos, á quienes por consiguiente no habia oído; tampoco desconoce el precepto constitucional que manda obrar de otra manera, contrayéndose en el informe á manifestar principalmente, que en su concepto solo debia aplicar la ley de 6 de Diciembre de 1856 por creer en suspenso algunas garantías que la misma carta fundamental otorga, teniendo en cuenta las circunstancias particulares en que se encontraba la capital del Estado de México, fuerte y constantemente anagada por plagiarios que habian derramado la angustia y el terror. El mismo letrado, para disculpar su equivocacion, refiere que tuvo multitud de negocios de diversos ramos, todos los cuales demandaban su atencion con igual preferencia, y que esto era cuando únicamente llevaba dos meses de servir el juzgado, procurando no obstante, suplir la falta de práctica con la dedicacion y el estudio constante.

Explicados de esta manera los motivos de sus procedimientos, se juzga exento de crimen, porque para la existencia de este es necesario el propósito deliberado de quebrantar una ley; siendo así que el intento del juez fué puntualmente aplicar la que á su juicio debió normar su conducta; reputa sin embargo purgada la equivocacion en que incurriera con la demostracion mandada hacer por el Tribunal Superior del mismo Estado, y recuerda sus antecedentes en la carrera literaria como prueba de honradez y dedicacion.

El Tribunal no puede desconocer el hecho que ha motivado esta diligencia; pero tampoco debe apartar la vista de la humildad franqueza con que el C. Sanchez Mireles da razon de su conducta, y que revela, no perversidad de corazon, sino convencimiento de una equivocacion muy fácil en jueces, que son puestos á desempeñar esos puestos sin tener la práctica que las leyes